

MINUTA PROYECTO USURPACIONES

La usurpación corresponde al acto de apoderarse ilegalmente de un bien, propiedad, cargo, título, posición o derecho -que legítimamente pertenece a otra persona o entidad- sin consentimiento del propietario y en contra de lo que estipula la ley. Así, este tipo de hechos delictivos, constituyen una violación a los derechos de propiedad o posesión de un individuo, y puede conllevar consecuencias que van desde las sanciones civiles, como es la restitución de la propiedad en cuestión, hasta sanciones de índole penal, como lo son las multas o incluso la prisión en casos graves y en donde así lo dictamine el Juez.

El escenario actual, indica que el delito de usurpación ha ganado relevancia en diversos países de la región, bajo el contexto de grupos criminales organizados cuyas estructuras son de alta complejidad, como así también bajo realidades sociales con altos niveles de desigualdad, falta de viviendas, entre otros problemas de impacto de nivel comunitario, en donde grupos marginados de la sociedad atentan contra la propiedad privada de terceros, usurpando territorios y/o propiedades habitacionales.

El principal problema detectado, es que los casos de usurpación que se han llevado a cabo en el último tiempo, responden muchas veces a una estrecha relación de vinculación con actividades de crimen organizado. Los grupos delictivos cuya estructura registran altos niveles de sofisticación, buscan aprovecharse de vacíos legales o la debilidad de las instituciones para llevar a cabo de forma organizada y sistemática, una serie de ocupaciones ilegales, lo que pone en complicación el obtener una resolución a este tipo de complejidades.

Por cierto, y debido a lo dificultoso que resulta el hecho de poder perseguir este delito, a raíz de las aristas legales, sociales y económicas que conllevan a esta serie de actos delictivos, es que, en los hechos, estas acciones terminan minando las confianzas de otras instituciones legales y gubernamentales.

En Chile, nuestro ordenamiento jurídico tipifica el delito de usurpación en el Código Penal, junto con los delitos contra la propiedad y contempla los casos de apropiación sobre bienes inmuebles y de aguas: A diferencia de otro tipo de delitos como es el caso de hurto y robo, la usurpación no exige que el objeto del delito sea sobre bienes ajenos. Esto, debido a que el bien jurídico protegido por el delito de usurpación no es la propiedad en sí, sino el ejercicio de los derechos derivados de la propiedad sobre el bien inmueble o las aguas que están inscritas en los respectivos Registros Conservadores.

El Código Penal clasifica este tipo de delitos en usurpación de bienes inmuebles y de aguas. Al mismo tiempo, la usurpación sobre bienes inmuebles es clasificada en violenta y no violenta, según sea ejercida o no, con violencia sobre las personas afectadas y víctimas de la usurpación.

La usurpación violenta, contenida en el artículo 457 del cuerpo legal, establece que 'al que con violencia sobre las personas ocupe una cosa inmueble o usurpe un derecho real que otro posea o tenga legítimamente, y al que, hecha la ocupación en ausencia del legítimo poseedor o tenedor, vuelto este le repele, además de las penas en que incurra por la violencia que cause, se le aplicará una multa de 11 a 20 Unidades Tributaria Mensuales'.

En tanto, el mismo Código Penal a través de su artículo 458, describe la usurpación no violenta en el siguiente tenor: 'Cuando el hecho se lleva a efecto sin violencia en las personas, la pena será multa de 6 a 10 Unidades Tributarias Mensuales'. Adicionalmente, el artículo 462 del cuerpo legal, tipifica una forma de usurpar un inmueble, generalmente una parte de él, y que consiste en modificar su cabida, alterando o destruyendo los deslindes que lo determinan en la corteza terrestre. Este hecho, según se establece, 'será sancionado con presidio menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 Unidades Tributarias Mensuales'.

Como bien es sabido, frente a la crisis de seguridad y ola de delincuencia que atraviesa el país, distintas fuerzas políticas han buscado establecer un acuerdo legislativo que permita tramitar de forma expedita y con la mayor de las voluntades, aquellas temáticas que dicen relación con iniciativas y proyectos de ley que vienen a suministrar mayores herramientas para que el Estado haga frente al alza de la delincuencia. En ese contexto, el llamado 'fast track' legislativo consideró la ley 'anti-usurpaciones' bajo este mecanismo, permitiendo endurecer las penas y la persecución de aquellos individuos que cometen este tipo de actos delictivos.

Dentro de los vetos formulados por el Presidente Gabriel Boric al proyecto de 'Ley de Usurpaciones' y que generó un áspero debate en ambas cámaras del Congreso Nacional, destaca el que dice relación con la pena alternativa de multa para los casos de usurpación no violenta y sin daño a las cosas. Esto consiste en las observaciones 4 y 5 del señalado veto.

Por lo anteriormente expuesto, es que los Senadores Ossandón, Castro Prieto, Chahuán, Galilea y Kast, se encuentran impulsando un proyecto de ley (boletín Nº 16.507-25) que busca modificar el citado Código Penal, readecuando los artículos

457 bis y 458, de manera tal de poder establecer una consistencia en la norma penal, eliminando incoherencias como la 'necesidad habitacional', conceptos que son inexistentes en el Derecho Penal.

La iniciativa de los parlamentarios busca eliminar, mediante ña creación de un nuevo artículo 457 bis y el reemplazo del 458, la opción de que el Juez pueda aplicar una pena alternativa de multa en determinados casos, reponiendo el contenido del proyecto que en primera instancia fue aprobado por el Congreso Nacional. Así, se busca suprimir la posibilidad de establecer multas como una pena posible para este tipo de delitos.

